

***Kepa Bilbao Ariztimuño***

**40 aniversario del 23F.**

**La amenaza constante del golpismo en la Transición.**

Febrero de 2021.

La transición política se realizó bajo una constante presión militar involucionista sobre el poder civil que se manifiesta con incidentes de variada intensidad durante todo el proceso de reforma política. Las Fuerzas Armadas fueron el único actor con capacidad para hacer fracasar o limitar el proceso de cambio político entre 1975 y 1982. La mayor parte de los mandos militares mantenían una lealtad inquebrantable a Franco y a su sucesor, Juan Carlos I. Se consideraban los garantes del orden institucional y los guardianes de las esencias nacionales. El sector más intransigente llegó a pensar incluso que era posible la continuidad del franquismo sin Franco. El creciente protagonismo militar se convirtió en un condicionamiento de la acción de gobierno y del proceso político.

Todavía hoy existe un gran desconocimiento de los frecuentes incidentes, conspiraciones, intentos de golpes de Estado y tensiones provocadas por ese sector ultra predominante en la cúpula militar. De la misma forma que se tiene una escasa información de la apelación de los sectores de la élite civil franquista a los militares para que actuaran contra la situación existente. Como dice Tusell, resulta difícil historiar todos estos incidentes porque han dejado poquísimos rastros escritos, aunque fueron insistentes y repetidos.

La primera conspiración militar de carácter involucionista de la que se tiene información tuvo lugar pocos meses después de la muerte de Franco, en marzo de 1976, cuando el tímido proyecto liberalizador de Arias Navarro y Manuel Fraga daba sus primeros pasos. Conspiración en la que además estaban implicados los cuatro ministros militares del gobierno de Arias, un franquista puro, poco amigo del Rey con el que no se llevaba, no situado en la extrema derecha, sino siempre oscilante entre ella y una actitud mucho más aperturista. Acababan de producirse los trágicos sucesos de Vitoria y coincidiendo con el inicio del juicio de los miembros de la Unión Militar Democrática tuvo lugar una importante reunión de mandos militares liderada por el vicepresidente para la Defensa, teniente general Fernando de Santiago, con el objetivo de forzar un cambio de gobierno con personas más afectas al franquismo. “Es tal vez la que más éxito podría haber tenido porque se produce en un momento en el que todavía no se había iniciado el proceso de democratización. Podían haber presionado al Rey para poner al frente del Gobierno a un militar que hubiese dirigido la transición hacia una democracia limitada”, opina Muñoz Bolaños, un experto en historia militar española en su nuevo libro en el que reconstruye las operaciones e intentonas golpistas que se sucedieron desde la muerte de Franco hasta 1986.

El general De Santiago lideraba una de las tendencias existentes en las Fuerzas Armadas posfranquistas frente a la que se alzaba el grupo encabezado por los generales Díez-Alegría y Gutiérrez Mellado. La primera era partidaria de que las Fuerzas Armadas dependieran directamente del rey, de que fueran un poder autónomo respecto al civil y de que fueran las garantes del nuevo régimen y en cierta forma las que lo determinarían. Por el contrario, la segunda tendencia defendía la profesionalización de las Fuerzas Armadas, su separación total de la política y su subordinación al Gobierno legítimo del Estado. Para los militares ultras el rey era la suprema referencia decisoria. Aún

respetaban a Juan Carlos como sucesor de Franco y estaban dispuestos a presionarle con toda dureza para exigirle una rectificación en sentido involucionista.

Con Adolfo Suárez en el gobierno, una vez forzada la dimisión de Arias por el rey, y tras la legalización del Partido Comunista en abril de 1977, en un contexto crítico, en el que a una crisis social y un paro creciente se añadían los atentados de las dos ETAS, el GRAPO, la extrema derecha y parapolicial, se gestaron una decena de operaciones civiles y militares contra el rumbo que tomaba la transición. Operaciones descubiertas y desarticuladas, perpetradas por un sector de un ejército que, no olvidemos, se había sublevado en cincuenta ocasiones en dos siglos y que había permanecido cuarenta años en el poder desde su última intentona exitosa en el 36.

En el invierno de 1977 tuvo lugar el primer intento de lo que el historiador Muñoz Bolaños denomina “transición paralela”, un proyecto civil, una especie de “franquismo coronado”, impulsado por un importante grupo de empresarios, financieros, periodistas, políticos y militares, cuya figura más visible era Luis María Anson, presidente de la Agencia EFE. Operación que tenía como objetivo sustituir a Suárez por un afín a los conspiradores, de la confianza del rey, y poder así controlar el proceso de cambio en beneficio de esa élite. En el verano de 1978 se trató de destituir a Gutiérrez Mellado y nombrar al tecnócrata del Opus Dei Gregorio López-Bravo, exministro de la dictadura, como vicepresidente de Suárez, para ser su alternativa, una operación que se consultó con EEUU.

Con otra orientación y finalidad más radical, también los *camisas azules* y los militares claramente involucionistas conspiraron contra el gobierno de Suárez -y más tarde de Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González- pero su objetivo no era controlar el proceso de cambio sino revertirlo mediante un golpe de estado militar. Precisamente fueron dos militares falangistas los protagonistas del primer intento de golpe duro, de la conocida como “Operación Galaxia”, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el entonces capitán de Infantería Sáenz de Ynestrillas. Antecedente clave del golpe del 23-F. Se hablaba de secuestrar al Gobierno durante la reunión del Consejo de Ministros y de obligar al Rey a aceptar un Gabinete de Salvación nacional. No sería su primer intento involucionista, más tarde Tejero cambiaría este asalto al Palacio de la Moncloa por el palacio de las Cortes y su compañero Ynestrillas participaría en el plan de secuestro de las más altas magistraturas del Estado en el Palacio de la Zarzuela, el 24 de junio de 1981, durante una recepción del rey, así como en el intento de atentado terrorista en La Coruña en 1985, durante el día de las FFAA, que más adelante detallaré.

A la “operación Galaxia” le seguiría el protagonizado en 1979 por el último de los africanistas, el general Luis Torres Rojas, Jefe de la División Acorazada “Brunete” nº1, la unidad más importante del ejército con unos regimientos que podían rodear y controlar la capital de España sin dificultad y cuya finalidad era instaurar un Gobierno militar, disolver el parlamento e ilegalizar al PCE. Posteriormente participaría en el 23F.

De todas estas operaciones civiles y militares fracasadas, las civiles diseñadas por Luis María Anson contenían unas líneas de actuación que se repetirán en la más conocida “Solución Armada”, origen del golpe de Estado del 23F en 1981. Según documentos del CESID (entre otras fuentes), la operación Armada se empezó a gestar en octubre-noviembre de 1979 tras los fracasos de los planes anteriores y la situación crítica que se vivía en ese momento en España y en el Ejército. Los planificadores de la “operación Armada” llegaron a la conclusión de que el “golpe de timón” ya no podía liderarlo un civil, como pensaron hacerlo con López-Bravo, ese papel debería hacerlo un militar de prestigio de absoluta lealtad al rey, que controlara las FFAA y neutralizara cualquier

intervención militar extemporánea que pudiera tener consecuencias muy graves. La operación contaba con la posición favorable del rey, el consenso de algunos de los líderes de los principales partidos y la bendición de numerosos y variados actores, como la CEOE, la jerarquía eclesiástica, entre otros. Su objetivo era convertir al preceptor e íntimo del rey, el general Alfonso Armada, en presidente de un Gobierno de salvación con representantes de todos los partidos políticos salvo los nacionalistas periféricos con el objetivo de corregir el rumbo que estaba tomando la situación con Suárez (el asunto de ETA y el de la autonomías<sup>1</sup> eran dos de los temas que más preocupaban, a corregir)<sup>2</sup>.

En el diseño del plan se barajaron dos posibles variantes. La dimisión de Suárez dio al traste con la variante prioritaria llamada “constitucional” o “legal”, en la cual, tras defenestrar a Suárez, mediante una moción de censura, sería elegido presidente Armada con el apoyo de la mayoría de los partidos del arco parlamentario. La inesperada dimisión de Suárez, conocedor de la trama golpista, y el pleno de investidura de Calvo-Sotelo, fueron imprevistos que aceleraron los acontecimientos, entorpecieron la coordinación de las distintas piezas estancas en juego y llevaron a poner en marcha la variante que Muñoz Bolaños denomina “pseudoconstitucional”, provocar un golpe de fuerza, una “situación de excepcionalidad”, como explicó Anson a la antigua cúpula del CESID, que sería aprovechada por Armada para presentarse en el Congreso como la solución a los problemas del país. Cuando Alfonso Armada se presentó en el Congreso, Tejero -desconocedor de todos los pormenores del plan- no le permitió dirigirse a los diputados para proponer su gobierno de salvación con Felipe González de vicepresidente y a las «órdenes del rey». Tejero, que quería una junta militar presidida por Milans del Bosch, al conocer dicha propuesta, se sintió engañado y utilizado. El suyo era un golpe duro que acabó por arruinar el golpe blando de Armada<sup>3</sup>.

Lo que aconteció después fue una vergüenza, un proceso judicial deficiente, que se cerró con rapidez, sin investigar, con desaparición de pruebas, unas condenas ridículas, unos indultos escandalosos y un secretismo incomprensible. El Supremo dictó sentencia condenatoria contra un reducido grupo de treinta implicados<sup>4</sup> y acordó el secreto de

---

<sup>1</sup> La reforma constitucional era la cuestión central de la “solución Armada”. Según Anson el proyecto para esta reforma fue elaborado por el jurista Carlos Ollero, senador por designación real entre 1977 y 1979 y su objetivo fundamental era limitar el desarrollo del Título VIII referido al sistema autonómico.

<sup>2</sup> Según diversas informaciones, en el empeoramiento de las relaciones del rey con Suárez, el último encontronazo estuvo relacionado con el empeño del Rey, en contra del presidente y Gutiérrez Mellado, en traer a la Jefatura del Estado Mayor a Alfonso Armada, secretario de la Casa Real, íntimo del monarca y viejo enemigo de Suárez. Así se lo había dicho al presidente el 22 de enero en la Zarzuela, parece ser que con un tono amenazante. Suárez le había cesado por sus actividades de propaganda, aprovechándose de su posición, a favor de Alianza Popular en las elecciones de 1977. Abordo el tema de la forzada dimisión de Suárez, el 23F y el papel del Rey en *Años de plomo. La excepcionalidad vasco-navarra (1975-1985)*, Gakoa, 2019, pp.226-232. Véase también el libro de Pilar Urbano *La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar* (Planeta, 2014).

<sup>3</sup> Véase Roberto Muñoz Bolaños, *La involución militar en la Transición. Los antecedentes del 23-F*, Memoria de Licenciatura presentada en la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección de Álvaro Soto Carmona y su último trabajo *El 23F y los otros golpes de Estado de la Transición*, Planeta, 2021, pp. 257-317.

<sup>4</sup> Alberto Oliart, ministro de defensa entonces, en entrevista a *El País* en febrero de 2001, con motivo del 20º aniversario del 23-F, contó que: “El general García Escudero, instructor del sumario, me advirtió: ‘Ministro, si tengo que aplicar estrictamente el Código de Justicia Militar son 4.000 generales, jefes, oficiales y suboficiales procesados’. ‘Olvídate’, le dije. ¿Cómo

sumario hasta 25 años desde la muerte de los procesados o 50 desde la fecha del golpe (para 2031). El gobierno sigue custodiando bajo llave documentos, grabaciones e informes de los servicios de inteligencia y se resiste a desclasificarlos.

Resultó descarado y vergonzoso el silencio de los líderes de los partidos políticos respecto a lo que sabían y la manipulación de los hechos por parte de los principales medios de comunicación, la debilidad manifiesta de las instituciones representativas frente a las cloacas del Estado, en las que sectores del ejército y las fuerzas de seguridad operaban por su cuenta y riesgo, hasta el papelón del propio monarca, al que con la información hoy disponible resulta escandaloso que haya todavía quienes sigan exculpándolo de toda implicación.

El Rey era una de las personas más informadas del país. Criado y educado por los militares franquistas, los conocía mejor que nadie. Sin duda fue quien, a la postre, resultó el gran beneficiario. Es a partir de entonces cuando el juancarlismo, la adhesión a la figura del rey por amplios sectores que no se reconocen como monárquicos, se convierte en uno de los mitos fundacionales de la Transición. Él había salvado al país del golpe y de la involución, y gracias a él y a su compromiso constitucional la democracia superó la dura prueba golpista. Paradójicamente fueron PSOE y PCE quienes más hicieron por asentar esta lectura de la Transición.

Pero con el 23F no se acabó el golpismo, el ministro de Defensa del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, Albero Oliart, tuvo que hacer frente a los coletazos del golpe de Estado del 23F y gestionar las convulsiones provocadas en el seno de las fuerzas armadas a raíz del Consejo de Guerra a los militares sublevados y su posterior ingreso en prisión. Entre otras, el llamado “manifiesto de los 100”, lanzado contra la prensa en apoyo a los golpistas suscrito por militares en activo y, el más relevante, el *golpe de los coroneles*. Sería este grupo, también llamado el de los *técnicos*, con el apoyo moral de San Martín, jefe de Estado Mayor de la División Acorazada Brunete, y Milans del Bosch, ambos encarcelados, el que pondría en marcha el golpe de estado del 27 de octubre de 1982. El objetivo de la operación era evitar la victoria del PSOE en las elecciones legislativas que tendrían lugar el día 28 del citado mes y que dieron su primera mayoría absoluta a Felipe González. El golpe de Estado estaba preparado para la víspera de las elecciones, y contaban con el apoyo de la extrema derecha política y financiera, como Blas Pñar, líder de *Fuerza Nueva* (FN) y el empresario José María de Oriol y Urquijo respectivamente. El golpe fue desmantelado. El 1 de octubre serían detenidos por orden del ministro de Interior, Juan José Rosón, los tres máximos implicados, dos coroneles y un teniente coronel, pero no se profundizó en la investigación. Consta que Milans del Bosch se entrevistó con el coronel Muñoz Gutiérrez, uno de los tres implicados, estando en la prisión de Fuencarral. Según los planes golpistas, Milans del Bosch sería liberado y lideraría el resto de acciones del golpe de Estado.

Con la colaboración de los principales medios de comunicación apenas se informó del complot y se justificó diciendo que era para no producir alarma social. El plan muy elaborado desde un punto de vista militar consistía en preparar varias acciones violentas contra personalidades progresistas, autonomistas y de izquierdas, para posteriormente culminar con una gran explosión en un bloque de viviendas militares de Madrid. De todo ello se culparía a ETA y a la ineficacia en la lucha contra el terrorismo, todo lo

---

íbamos a hacer un proceso a 4.000 militares? Los que habían estado hablando, quizá en alguna reunión, obedecieron las órdenes a la hora de la verdad”.

cual justificaría la intervención militar. El plan pretendía neutralizar en Madrid «diversas instituciones del Estado, copar redes de transmisión y comunicación y tratar de movilizar y levantar distintas unidades militares». El ministro de Defensa del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, Alberto Oliart, informó de los detalles de la operación. El plan golpista incluía el bombardeo de la Zarzuela y de La Moncloa.

Tras el triunfo del PSOE, se produjeron las dos últimas operaciones involucionistas de las que se tiene constancia por parte de grupúsculos militares golpistas residuales contrarios a la democracia, la conocida como “Operación zambombazo” y la protagonizada por el coronel de Caballería Carlos de Meer de Rivera en 1986<sup>5</sup>.

La “Operación zambombazo” fue el intento de asesinato de los reyes, las infantas, Felipe González, Alfonso Guerra, Narcís Serra y los miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor mediante la voladura de la tribuna durante el desfile del día de las Fuerzas Armadas en La Coruña en 1985<sup>6</sup>. Según el cabeza visible, el comandante Ynestrillas, el objetivo era crear un vacío de poder que facilitase la intervención del ejército en la política.

Una vez desarticulado gracias a Francisco Lerena Zambrano, un infiltrado del CESID<sup>7</sup>, el gobierno prefirió no tomar medidas. Nadie fue detenido ni juzgado y el asunto permaneció oculto para la opinión pública durante más de quince años. Con todo, a día de hoy, son muy escasos los datos que se tienen de este hecho. Seguramente el CNI tendrá documentación reservada al respecto. Desde luego, el silencio que rodea a este estremecedor hecho es inaudito y deja a las claras hasta qué punto se ocultan hechos y datos relevantes de nuestra historia reciente, como el 23F y los GAL, entre otros.

El poder civil no ejerció el mando de las fuerzas armadas en el sentido real del término hasta mediados de los ochenta en que se produce una relevante renovación generacional. Los gobiernos de la transición, tanto los de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, como los socialistas de Felipe González, mostraron una gran debilidad en la política militar ante la amenaza constante de involución.

---

<sup>5</sup> Sobre el golpismo residual y el caso Meer, véase *El 23F y los otros golpes de Estado de la Transición*, Muñoz Bolaños, Espasa, 2021, pp.565-574.

<sup>6</sup> Siguiendo el método que utilizó ETA en 1973 contra el almirante Luis Carrero Blanco o el atentado contra el presidente de Egipto, Anuar Al-Sadat, en 1981 durante un desfile militar, Ynestrillas y los militares implicados en la conspiración tenían previsto alquilar un edificio con sótano próximo a la tribuna y hacer un túnel en el que colocar más de 100 kilos de potentes explosivos. Más tarde, ETA habría sido culpada del ataque. Años más tarde uno de los implicados declaró a *El País* “a condición de no publicar su nombre”: “*Después de 1981 quedó claro que el golpe no podía hacerse con el Rey ni pese al Rey, sino contra el Rey. Para nosotros, era un perjurio y un traidor*”.

<sup>7</sup> Francisco Lerena Zambrano fue un topo apodado el *Lobo azul*, exmiembro de la Guardia Civil y agente del centro de inteligencia (CESID). Lo cuenta con detalle en un libro que publicó veinte años después de los hechos narrados. Infiltrado en grupos de extrema derecha, además de “la operación zambombazo”, consiguió desbaratar otros intentos de atentados terroristas. Frustró un atentado en el metro de Madrid, la colocación de una bomba en un cine donde se proyectaba la polémica película de “Dios te salve María”, un atentado con una motocicleta con explosivos contra el diputado Juan María Bandrés que le fue encargado de ejecutar al propio Lerena, los intentos de asesinato del periodista Julio Rodríguez, del teniente general Sáenz de Santamaría, y, en 1984, la colocación de una bomba al paso de un autobús de familiares de ETA cuando volvían de visitar a los presos en la prisión de Alcalá Meco. [Francisco Lerena, *Así intentamos matar al Rey*, Espejo de Tinta, Madrid, 2005.]